

Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales normales.

Los países de destino de las exportaciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General de Comercio Exterior, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 y en el punto 6.º de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Octavo.-Deberán indicarse en las correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de la licencia de exportación, que el titular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema establecido, mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancías importadas en régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de comprobación.

Décimo.-Esta autorización se registrará, en todo aquello relativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la presente Orden ministerial, por la normativa que se deriva de las siguientes disposiciones:

Decreto 1492/1975 («Boletín Oficial del Estado» número 165).

Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 282).

Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).

Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 77).

Undécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Comercio Exterior, dentro de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 19 de noviembre de 1986.-P. D., el Director general de Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

31682 *ORDEN de 24 de noviembre de 1986 de disolución de oficio, revocación de la autorización administrativa y de intervención en la liquidación de la Entidad «Mediodía, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros».*

Ilmo. Sr.: En el expediente administrativo abierto en la Dirección General de Seguros a la Entidad «Mediodía, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros», a consecuencia de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo en su domicilio social con arreglo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del Seguro Privado, ha resultado comprobado que la Sociedad de referencia presentaba al cierre de los ejercicios 1984 y 1985 dificultades de liquidez determinantes de demora e incumplimiento en sus pagos, insuficiencia de bienes aptos para cubrir sus obligaciones por razón de contratos de seguro y pérdidas acumuladas superiores al 100 por 100 del capital social desembolsado, incurriendo en la causa de disolución contemplada en el artículo 30.1, d), de la Ley 33/1984, de 2 de agosto.

Al no haber actuado dicha Sociedad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.2 de dicha Ley y en el artículo 89.1 y 2 del Reglamento de 1 de agosto de 1985, la Dirección General de Seguros procedió a la instrucción del oportuno procedimiento tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley precitada, en el que, una vez cumplido el trámite previsto en el artículo 91.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, resulta que la Sociedad expedientada no ha removido la causa de disolución en que se encuentra incurso ni ha adoptado el acuerdo de disolución.

A la vista de lo expuesto y de los demás antecedentes incorporados al expediente, este Ministerio ha acordado lo siguiente:

Primero.-Disolver de oficio a la Entidad «Mediodía, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros», en aplicación de lo establecido en los apartados 1.d) y 3 del artículo 30 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado.

Segundo.-Revocar la autorización administrativa concedida a «Mediodía, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros», para el ejercicio de la actividad aseguradora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.f) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto.

Tercero.-Intervenir la liquidación de «Mediodía, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros», al amparo de lo dispuesto en el número 3 del artículo 31 de la Ley 33/1984 y en el número 1 del artículo 98 del Reglamento de 1 de agosto de 1985.

Cuarto.-Designar a tal efecto a los Inspectores del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado don Enrique García Beltejar y don Francisco Sola Fernández para el cargo de Interventores del Estado en la liquidación de la referida Entidad con las facultades y funciones que al efecto señala el ordenamiento vigente y, en particular, el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985.

Quinto.-Conceder un plazo de quince días a la Entidad, a partir de la notificación a la misma de la presente Orden, para proceder al nombramiento de Liquidador o Liquidadores, conforme a lo dispuesto en el número 7.b) del artículo 31 de la Ley 33/1984, y para dar publicidad a la disolución con arreglo al número 1 del artículo 90 del Reglamento de 1 de agosto de 1985.

Sexto.-Aplicar a la presente disolución lo dispuesto en el apartado c) del artículo 3.º del Decreto-ley 18/1964, de 3 de octubre, y en el número 4 del artículo 2.º del Decreto 2532/1967, de 11 de octubre, a los efectos de que sean asumidas por el Consorcio de Compensación de Seguros las obligaciones de la Entidad disuelta en el ámbito del Seguro Obligatorio del Automóvil.

Madrid, 24 de noviembre de 1986.-P. D., el Secretario de Estado de Economía y Planificación, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

31683 *CORRECCION de erratas de la Orden de 13 de octubre de 1986 por la que se autoriza el cambio de titularidad y traspaso de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Conejos Asturianos, Sociedad Anónima» (COASA), expediente AS-4, a favor de «Matadero Industrial de Conejos, Sociedad Anónima» (MAINCOSA).*

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 262, de fecha 1 de noviembre de 1986, a continuación se formula la oportuna rectificación:

En la página 36621, segunda columna, primera línea, donde dice: «... de beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Conejos Asturia-...», debe decir: «... de los beneficios fiscales concedidos a la Empresa «Conejos Asturia-...».

31684 *RESOLUCION de 5 de noviembre de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 1 de marzo de 1986 por el que la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Visto el escrito de fecha 1 de marzo de 1986 por el que la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la Entidad consultante es una Confederación de organizaciones patronales;

Resultando que se consulta si un fabricante acogido al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido que vende al por menor su producción, tiene la obligación de conservar los tickets de su máquina registradora o vales sustitutivos;

Considerando que conforme a lo dispuesto en el artículo 161 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» número 261, del 31), los sujetos pasivos de dicho Impuesto están obligados a conservar las copias de las facturas o documentos que las sustituyan, expedidos por ellos o por su cuenta durante el periodo de prescripción del Impuesto;

Considerando que el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 30), por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales, establece en su artículo 2, número 1, que dichos empresarios y profesionales están obligados a expedir y entregar factura por cada una de las operaciones que realicen y a conservar copia o matriz de la misma, incluso en los casos calificados como autoconsumo en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Este deber incumbe incluso a los empresarios o profesionales acogidos al régimen simplificado del citado Impuesto;

Considerando que el artículo 7.º del referido Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, preceptúa que los empresarios y profesionales están obligados a conservar las copias de las facturas o documentos que las sustituyan, expedidas por ellos o por su cuenta durante el periodo de prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias afectadas por las operaciones correspondientes.

Esta Dirección General considera ajustada a derecho la siguiente contestación a la consulta vinculante formulada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB):

Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido están obligados a conservar las copias de las facturas o documentos que las sustituyan, expedidos por ellos o por su cuenta durante el periodo de prescripción de dicho Impuesto.

En consecuencia, los fabricantes acogidos al referido régimen simplificado, tienen la obligación de conservar durante el indicado periodo los tickets expedidos por sus máquinas registradoras o, en su caso, los vales numerados.

Madrid, 5 de noviembre de 1986.-El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

31685 *RESOLUCION de 7 de noviembre de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa a la consulta formulada con fecha 23 de abril de 1986, por la Agrupación de Industriales del Besós, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Visto el escrito de fecha 23 de abril de 1986, por el que la Agrupación de Industriales del Besós formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido,

Resultando que la Entidad consultante está autorizada para formular consultas vinculantes relativas a dicho Impuesto al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 28);

Resultando que determinadas Cooperativas o establecimientos comerciales, en virtud de concierto, realizan las actividades propias de los economatos en relación con las Empresas que con ellas han suscrito el mencionado concierto;

Resultando que dicho Economato realiza entregas de bienes al por menor, a los trabajadores de las Empresas en relación con los cuales realiza la actividad de Economato laboral, mediante un precio inferior al del coste;

Resultando que las Empresas a las cuales están vinculados los trabajadores entregan a las que asumen la función de Economato laboral determinadas aportaciones dinerarias destinadas a hacer posible que los precios de los productos entregados sean asequibles a los trabajadores de aquellas Empresas;

Resultando que la Entidad consultante considera que dichas aportaciones son contraprestación del servicio de Economato;

Resultando que se formula consulta sobre la calificación fiscal de las operaciones descritas y la sujeción de las mismas al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Considerando que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.º, número 1, de la Ley 30/1985, de 2 de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 190, del 9), están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional;

Considerando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria («Boletín Oficial del Estado» del 31), el Impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho imponible,

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados;

Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.º y 11 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 31), en el supuesto de hecho que se describe en el escrito de consulta solamente se realiza por las Empresas que asumen la función de Economato laboral una de las modalidades de hecho imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido; entregas de bienes a los trabajadores de las Empresas concertadas, sin que pueda interpretarse que dicho Economato preste servicio a las Empresas mencionadas en primer lugar;

Considerando que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 29, número 1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, la base imponible de dicho tributo está constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo, procedente del destinatario o de terceras personas, y que, en consecuencia debe comprender no sólo el precio pagado por los trabajadores por los bienes entregados, sino también las aportaciones efectuadas por las Empresas a las cuales están vinculados dichos trabajadores;

Considerando que el artículo 61, número 4, del citado Reglamento preceptúa que los sujetos pasivos deducirán exclusivamente el Impuesto satisfecho como consecuencia de las importaciones o el soportado en las adquisiciones de bienes o servicios que estén directamente relacionados con la actividad empresarial o profesional;

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el número 5 del citado artículo 61 del Reglamento del Impuesto, se entenderán directamente relacionados con su actividad Empresarial o profesional los bienes o servicios afectados exclusivamente a la realización de dicha actividad;

No se considerarán exclusivamente afectados a una actividad empresarial o profesional, entre otros, los bienes o servicios destinados a la satisfacción de las necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales o de sus familiares, o bien del personal dependiente de los mismos, con excepción de los bienes destinados al alojamiento gratuito, en los locales o instalaciones de la Empresa, del personal encargado de la vigilancia y seguridad de los mismos.

Esta Dirección General considera ajustada a derecho, la siguiente contestación a la consulta formulada por la Agrupación de Industriales del Besós:

Primero.-Están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, las entregas de bienes efectuadas por Cooperativas o Empresas que desempeñen funciones de Economato laboral en relación con los trabajadores de otras Empresas, a dichos trabajadores.

Segundo.-La base imponible de las entregas de bienes realizadas por las referidas Empresas que actúen como Economatos laborales a los mencionados trabajadores, estará constituida por el importe total de la contraprestación de las mismas procedentes de los trabajadores que adquieran los productos entregados y de las Empresas que tengan concertada la función de Economato.

Forman parte de dicha base imponible las cantidades que periódicamente reciba el Economato laboral colectivo de las Empresas concertadas.

Tercero.-Las Empresas concertadas no podrán efectuar deducción alguna como consecuencia de los pagos que realicen a las Cooperativas u otras Empresas que hayan asumido las funciones de Economato laboral colectivo en relación a los trabajadores de las mencionadas en primer lugar.

Madrid, 7 de octubre de 1986.-El Director general, Francisco Javier Eiroa Villarnovo.

31686 *RESOLUCION de 7 de noviembre de 1986, de la Dirección General de Tributos, relativa al escrito de fecha 17 de marzo de 1986, por el que la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre.*

Visto el escrito de fecha 17 de marzo de 1986, por el que la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios formula consulta vinculante en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido;

Resultando que la Entidad consultante es una Organización patronal legalmente reconocida al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/1977;

Resultando que se consulta si debe ser calificada como primera o como segunda transmisión, a los efectos del artículo 13, número 1, apartado 22, del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, la transmisión que realiza un constructor de los pisos que